

Estructuras Ilícitas de Poder en Colombia

www.360geopolitica.org

Durante la campaña presidencial de Colombia en 2022, Petro y el Pacto Histórico estuvieron vinculados a criminales encarcelados y figuras del crimen organizado a través del llamado “Pacto de la Picota”. Los críticos alegaron que estos vínculos intercambiaban apoyo electoral por favores. Lejos de dismantlar estas conexiones, Petro las consolidó en el poder, permitiendo que su movimiento se beneficiara nuevamente en las elecciones de 2026, lo que evidencia una vulnerabilidad estructural en la democracia colombiana.

Al asumir la presidencia, Petro promovió el Acuerdo de Paz Total, otorgando estatus de negociación a estructuras de poder ilícitas. Al reconocer como interlocutores a antiguos objetivos de operaciones de seguridad, la política transformó el panorama de seguridad nacional e internacional de Colombia. Analistas sostienen que Paz Total debilitó la disuasión, fracturó las jerarquías de seguridad y permitió que actores armados no estatales consolidaran control territorial y operativo en lugar de desarmarse.

Mientras los colombianos comunes no vieron beneficios, el gobierno y el Pacto Histórico obtuvieron ventajas políticas, estratégicas y, supuestamente, financieras, exponiendo un peligroso entrelazamiento entre negociación, seguridad y confianza pública.

Crimen y Repercusiones Regionales

Paz Total ha fortalecido tanto al régimen de Maduro como al de Petro, permitiendo que redes vinculadas al ejército venezolano ejerzan control de facto a lo largo de la frontera Colombia-Venezuela en coordinación con actores criminales. Estas estructuras operan junto con redes extremistas transnacionales, incluyendo Hezbolá y Hamas, y grupos armados colombianos como el ELN, la Segunda Marquetalia y disidencias de las FARC.

En lugar de contener las amenazas criminales, la postura de seguridad de Colombia ha reducido deliberadamente la presión operativa sostenida sobre estas redes, generando condiciones para la expansión ilícita y una mayor coordinación transfronteriza. Investigaciones creíbles sugieren que, bajo Paz Total, la administración Petro ha compartido inteligencia con individuos vinculados a estos grupos. En conjunto, estas políticas han erosionado la disuasión, debilitado el apalancamiento institucional y acelerado el deterioro del entorno de seguridad, reforzando modelos de gobernanza criminal en la frontera y complicando los esfuerzos internacionales contra el crimen.

Territorio Perdido, Democracia Socavada

Colombia ha experimentado un notable declive en el control territorial efectivo. Evaluaciones recientes

indican que actores alineados con el Pacto Histórico y el marco de Paz Total ejercen influencia decisiva sobre aproximadamente el 70% del país.

En muchas regiones, las fuerzas armadas se han reducido a funciones limitadas u observacionales, debilitando su mandato constitucional de brindar seguridad y proteger a los civiles. Este vacío de poder ha facilitado la instrumentalización política de la inseguridad, con actores de la coalición gobernante operando en medio de violencia política creciente, intimidación y amenazas contra opositores, periodistas independientes y la sociedad civil.

La Política Bajo Fuego

El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay representa una escalada dramática de la violencia política. Las investigaciones vinculan el atentado a la facción Segunda Marquetalia de Iván Márquez, con Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, como intermediario clave. Notablemente, El Viejo permanecía encarcelado en La Picota mientras enviados conectados con Petro negociaban el Pacto de la Picota, revelando vínculos persistentes entre actores políticos y redes criminales.

Este caso ilustra los riesgos de confundir negociación, impunidad y responsabilidad estatal en territorios dominados por criminales. Lejos de contener la violencia política, la convergencia entre gobierno, redes armadas e intermediarios criminales ha consolidado la inseguridad y amplificado las amenazas contra opositores, periodistas y la sociedad civil, socavando la resiliencia democrática e institucional de Colombia.

Economías Criminales

Grupos armados ilegales y redes transnacionales han operado durante mucho tiempo en Colombia y Venezuela, traficando cocaína, armas y personas, y extrayendo oro y otros minerales estratégicos. El debilitamiento del control estatal ha permitido que estas organizaciones consoliden cadenas de suministro con alcance regional y global.

La frontera Colombia-Venezuela, de 2.500 kilómetros, se ha convertido efectivamente en una zona permisiva. Las brechas de cumplimiento y la tolerancia oficial permiten que grupos armados colombianos—como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo—junto con actores como Hezbolá y Hamas, gestionen cadenas de suministro de cocaína y expandan operaciones de minería ilegal, extorsión y otros ingresos ilícitos.

Los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente el sector petrolero, están inmersos en una red geopolítico-criminal utilizada por Irán, Rusia y China, funcionando como fuentes de ingresos más que como instrumentos de desarrollo estatal. Altos mandos del

Estado y militar venezolanos mantienen vínculos directos con sindicatos criminales como el Cártel de los Soles y Tren de Aragua, coordinando con socios transnacionales para gestionar ingresos petroleros, corredores de drogas y operaciones de lavado de dinero.

En este contexto, la propuesta “zona binacional especial” de Maduro-Petro habría formalizado economías ilícitas, diluido la soberanía y otorgado cobertura legal a actores criminales y estatales hostiles en la frontera. Lejos de fomentar integración, habría consolidado estructuras paralelas de poder y acelerado la erosión de la autoridad estatal.

La política internacional hacia Colombia y Venezuela ha sido inconsistente. Mientras la ONU, la UE y sus socios supervisan a los aliados de Maduro por corrupción y explotación extranjera, no se aplican estándares comparables al marco de Paz Total en Colombia. Esta asimetría permite que redes criminales operen bajo sanción interna, mientras las respuestas internacionales priorizan la soberanía nominal y el acceso a recursos sobre el estado de derecho y la protección civil.

Normalización Internacional y Legitimidad Política

El acercamiento diplomático entre Colombia y Venezuela, junto con la reducción del escrutinio sobre la integridad electoral, ha debilitado los mecanismos regionales de rendición de cuentas. Las denuncias de financiamiento de crimen organizado vinculadas a la campaña de Petro, a pesar de sanciones del Consejo Nacional Electoral, evidencian la penetración de economías criminales en procesos democráticos.

Ambos regímenes, el de Petro y el de Maduro, han invertido más en imagen política y legitimidad internacional que en beneficios concretos para los ciudadanos. Este desequilibrio-frecuentemente ignorado internacionalmente-permite que fallas de gobernanza, corrupción e influencia criminal persistan bajo un velo de progreso diplomático, erosionando la confianza pública y la resiliencia institucional.

El Rol de la Alineación Política de Izquierda

Petro frecuentemente enmarca el descontento y la crítica política como “conspiraciones de derecha”, estrategia similar a la de Maduro para desacreditar la supervisión y silenciar disidencia. Este enfoque posiciona a medios independientes, oposición política y supervisión internacional como adversarios, protegiendo las acciones del gobierno de la rendición de cuentas.

Su política exterior favorece el acercamiento a regímenes vistos con recelo por Occidente, reconociendo la presidencia de Maduro y evitando alinearse con la oposición venezolana. La solidaridad política de izquierda-respaldada por Irán, Rusia, China,

Suecia y Portugal-a menudo eclipsa el escrutinio sobre corrupción, debilitamiento institucional y retroceso democrático.

En varias regiones, partidos de izquierda, think tanks y ONG han priorizado la alineación ideológica sobre el desempeño gubernamental, permitiendo que el control narrativo y la solidaridad de régimen superen la rendición de cuentas.

Con las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia en 2026 acercándose, los riesgos son altos. Sin una recalibración hacia estándares consistentes de integridad electoral, estado de derecho y transparencia, las redes criminales y actores políticos que operan fuera de normas democráticas podrían consolidar aún más su influencia, profundizando la inseguridad y erosionando la confianza pública en toda la región.

Bogotá, Colombia - 18 de enero de 2026.